

Reproducido en www.relats.org

DOS ARTICULOS SOBRE PANDE,OA U

Mariana Muzzucato

Economista. Directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London (UCL). Profesora de ciencia y de políticas tecnológicas en la Universidad de Sussex, en el Reino Unido

Libros traducidos al español

2014 El Estado emprendedor. Mitos del sector público frente al privado (2013), RBA Libros

2019 El valor de las cosas. Quién produce y quién gana en la economía global (2018), Taurus

I.LOS CAMBIOS EN EL CAPITALISMO SOLO

SE DAN SI EL GOBIERNO LOS FUERZA

Contenidos tomados de reportaje publicado en El Pais, mayo 2020 <https://elpais.com/economia/2020-04-25/mariana-mazzucato-los-cambios-en-el-capitalismo-solo-se-dan-si-el-gobierno-los-fuerza.html>

La crisis sanitaria ha llevado al Estado a casi cada rincón de las economías, desde el sistema de salud, al rescate de algunas industrias o la liquidez de los bancos centrales. Dado el tamaño de la emergencia nadie pregunta de dónde sale el dinero, igual que en las guerras. Esto debería ser

una llamada de atención sobre cómo gestionamos sectores decisivos para que nuestras economías y nuestras sociedades sean más resistentes. No solo se trata de una financiación apropiada sino también de la vertebración del sistema de salud público, de cómo producimos los respiradores o sobre el sistema educativo. Esta crisis nos debería obligar a repensar la economía.

El modelo de referencia para la etapa posterior a la crisis debería basarse en tres pilares. El primero, que el dinero puede crearse, también en la zona euro. El segundo, que hay que financiar y respaldar a los sectores decisivos, como el sistema sanitario, y llevar a cabo una modernización del Estado del bienestar, porque nuestras necesidades han cambiado. Y tercero, el Gobierno debe introducir condicionalidad en las ayudas que están solicitando sectores como las aerolíneas o el turismo para orientar el crecimiento hacia un modelo más sostenible, prohibir a esas empresas la recompra de acciones o exigirles mantener el empleo.

El problema es que el Estado ha dejado de hacer su trabajo. Las farmacéuticas, por ejemplo, reciben cada año miles de millones de dólares de dinero público en desgravaciones fiscales y, si reciben dinero público, el Estado debería imponer condiciones sobre las garantías de suministro. La carencia actual de mascarillas, de respiradores o de geles desinfectantes está directamente ligada a la desindustrialización de los países desarrollados, que se han convertido mayoritariamente en economías de servicios.

No se trata de que el Estado pase a decidir cómo se dirigen las empresas sino que no se limite a ser un mero regulador, que pase a ser un referente y un creador junto al sector privado. Eso exige inversión para diseñar un modelo que proporcione el tipo de crecimiento sostenible e inclusivo que necesitamos y eso requiere inversión pública y privada.

En los ochenta se hablaba del efecto expulsión que el sector público tenía sobre el privado. Ese era un concepto ideológico que sin embargo puede ser cierto en determinados aspectos. En esta crisis, por ejemplo, EE UU ha recurrido a la Ley de Producción de Defensa para forzar a las empresas a fabricar respiradores. Eso no expulsa al sector privado, que no los estaba haciendo. También es verdad que un mayor papel del Estado puede conllevar problemas de corrupción a la hora de decidir qué sectores ganan y cuáles pierden. Lo que debería hacer el Gobierno es fijar una dirección, un modelo. Pensemos en el Pacto Verde. Es verdad que el Gobierno debería hacer algunas inversiones pero sobre todo debería redirigir sus incentivos en forma de créditos, regulación o desgravaciones hacia una determinada forma de inversión o innovación. Por ejemplo, cuando la industria del acero en Alemania pidió ayudas públicas, el Estado les obligó a reducir sus desechos.

Se necesita una economía orientada hacia un propósito, en una dirección. El objetivo no es lanzar dinero desde un helicóptero, sino la creación de estructuras que permitan absorber esa creación de dinero. Si solo se crea dinero, es evidente que eso puede crear inflación si no se aumenta la capacidad de la economía.

Esta no es la misma crisis del 2008, sus orígenes son diferentes. En 2008 se derivaba de la ultrafinanciación de la economía, tanto del sector financiero como de las empresas y los hogares. En esta crisis nos hemos dado cuenta de que nuestro modelo de crecimiento está no solo esquilmando el planeta sino que nos pone en contacto con animales que no hemos visto con anterioridad, con virus para los que no tenemos defensas, como consecuencia del sistema insostenible de producción que tenemos.

Pero el denominador común de ambas crisis es la desigualdad. En este tiempo, se ha hablado de que las empresas deberían aumentar su valor para todos los

partícipes, no solo para los accionistas, como en el último Foro de Davos. Pero la covid-19 demuestra que eso solo

II.SOCIALIZAMOS LAS QUIEBRAS. TAMBIÉN DEBERÍAMOS SOCIALIZAR LOS ÉXITOS

Publicado en Sin Permiso, julio 2020

<https://www.sinpermiso.info/textos/socializamos-las-quebras-tambien-deberiamos-socializar-los-exitos>

Cuando la economía está en crisis, ¿a quién le pedimos ayuda? A las empresas no, pero sí a los gobiernos. Pero cuando la economía florece ignoramos a los gobiernos y dejamos que las empresas acaparen los beneficios.

Esta fue la historia de la crisis financiera de 2008. Un historia similar se está desplegando hoy. Los gobiernos han gastado billones en paquetes de estímulo económico sin crear estructuras –como un dividendo ciudadano, que incentivaría el gasto público– que tornen los remedios cortoplacistas en medios para una economía inclusiva y sostenible.

Esto lleva al corazón de lo que aumenta la desigualdad: socializamos los riesgos pero privatizamos los beneficios. Según esta opinión, solo las empresas crean valor; los gobiernos meramente facilitan el proceso y arreglan “fallos del mercado”.

La crisis del coronavirus ofrece una oportunidad para cambiar esta dinámica y requiere un acuerdo mejor. Pero para conseguirlo debemos redefinir el concepto mismo de valor. Hasta ahora, hemos [confundido precio con valor](#), y esa confusión ha dado alas a la desigualdad y ha distorsionado el papel del sector público.

Nuestra comprensión del valor proviene de economistas y responsables de política pública que lo ven meramente como una cuestión de intercambio: esencialmente, solo algo que posee un precio es valioso. Esta perspectiva sobrevalora los bienes y servicios etiquetados con un precio, los cuales conforman a su vez el producto interior bruto, el propulsor de la política pública. Esto tiene efectos perversos. Una mina de carbón que disemina carbono en la atmósfera aumenta el PIB, y de este modo es valorada. (La contaminación que causa no se tiene en cuenta). Pero el cuidado de los hijos por parte de sus padres en casa no va etiquetado con un precio y por eso no es valorado.

Esto también funciona a nivel individual. La gente que gana mucho dinero parece ser muy “productiva”. En 2009 Lloyd Blankfein, el director ejecutivo de Goldman Sachs, afirmaba que los trabajadores del banco [se encontraban](#) “entre los más productivos del mundo”. Lo dijo tan solo un año después de la crisis financiera de 2007-2008 –un año después de que la empresa hubiera recibido un rescate de 10 mil millones de dólares del gobierno (posteriormente devueltos)–.

Claramente, el valor no se mide mejor por el precio o el pago. Es más, los gobiernos crean valor cada día, del cual se benefician los ciudadanos y las empresas. Se benefician de estructuras "básicas" como carreteras, educación y otros bienes y servicios esenciales, pero también de las tecnologías que dan forma a nuestra economía.

La financiación pública de la investigación y el desarrollo nos ayudó [trayendo innovaciones](#) como la tecnología GPS que impulsa a Uber y el internet que hace posible Google. Lo mismo es cierto para muchos medicamentos de gran éxito, que recibieron [fondos de alto riesgo del gobierno](#) para la investigación temprana, y para las fuentes de energía renovable como la solar y la eólica, que también fueron financiadas por los contribuyentes en su desarrollo. De hecho, este [también fue el caso del fracking](#).

Por ello, algo como un dividendo ciudadano –en el que los ciudadanos poseen participaciones iguales en un fondo vinculado a la riqueza nacional– transformaría la historia de la intervención gubernamental y crearía una economía más equitativa. Dando a la población una participación directa en el valor que produce un país, ayudaría a establecer un mejor sistema: las inversiones públicas para las empresas y la investigación también producirían recompensas para los ciudadanos. Eso ayudaría a reducir la desigualdad y a socializar tanto los riesgos como los beneficios.

Desde 1982, por ejemplo, Alaska ha estado pagando [un dividendo ciudadano](#) a través de su Fondo Permanente basado en el petróleo. El estado está entre los más igualitarios del país. Y en California, el gobernador Gavin Newsom ha pedido que se pague un "dividendo de datos" a los ciudadanos del estado por el uso de su información personal, lo cual es apropiado para un estado que alberga a multimillonarios de la tecnología que no podrían haber ganado su dinero sin inversiones públicas.

Un dividendo ciudadano (a veces llamado fondo de riqueza pública) es una forma de reequilibrar nuestra economía. Las participaciones mediante acciones es otra. Cuando el gobierno rescata empresas privadas o les presta fondos públicos, debe estructurar esos acuerdos de manera que los intereses públicos estén protegidos y las ganancias sean proporcionales a los riesgos. Los ciudadanos podrían entonces adquirir participaciones en empresas que reciben [apoyo gubernamental de alto riesgo](#), como las que reciben rescates como parte de la recuperación del coronavirus.

No es un concepto nuevo. Durante la gran depresión, el gobierno de EE.UU. tenía acciones en empresas a través de la Corporación Financiera de Reconstrucción, una agencia gubernamental casi independiente que ayudó a financiar el New Deal.

¿Esto es socialismo? No, es simplemente admitir que el Estado, un inversor en primera instancia, puede beneficiarse pensando más como un capitalista de riesgo en torno a objetivos sociales, como por ejemplo una transición verde. En lugar de culpar al gobierno por las malas inversiones, la verdadera cuestión es cómo asegurarse de que el país se beneficie de las buenas.

Por ejemplo, durante la administración Obama, el Departamento de Energía hizo varias inversiones en compañías verdes, incluyendo 500 millones de dólares en préstamos garantizados a la compañía solar Solyndra y 465 millones de dólares a Tesla. Cuando Solyndra quebró, los contribuyentes la rescataron. Pero cuando Tesla creció, los contribuyentes no participaron de los beneficios.

Peor aún, el Estado estructuró el préstamo de Tesla de modo que tenía la opción de obtener tres millones de acciones en la empresa si Tesla no pagaba el préstamo. Si hubiera hecho lo contrario (pedir a Tesla que pagara tres millones de acciones *cuando sí devolviera* el préstamo) el gobierno habría cubierto la pérdida de Solyndra y tendría más fondos para futuras inversiones.

El gobierno también necesita negociar con más dureza para asegurarse de que el crecimiento económico funcione para sus ciudadanos. Los subsidios y préstamos [deben venir con condiciones](#), alineando el comportamiento corporativo con los objetivos de la sociedad. Hoy en día esto significa que las empresas que reciben asistencia para el coronavirus pueden ser hechas para retener a los trabajadores, comprometerse a la reducción de emisiones y prohibir el uso excesivo de la readquisición de acciones.

Esto ha sucedido en otros lugares. En Dinamarca, el gobierno ofreció a las empresas [generosas compensaciones salariales](#) con la condición de que no pudieran hacer despidos por razones económicas; también se negó a rescatar a las empresas [en paraísos fiscales](#) y

prohibió el uso de fondos para dividendos y la recompra de acciones. En Francia, los rescates a las aerolíneas estaban supeditados a que estas alcanzaran [ambiciosos objetivos en materia de emisiones](#).

Finalmente, el precio debe ponerse al servicio del valor, no al revés. La carrera por una vacuna contra el coronavirus [ofrece una buena oportunidad](#). Para empezar, el precio que los ciudadanos pagan por los productos farmacéuticos no refleja [la enorme contribución pública](#) –en 2019, más de 40 mil millones de dólares– a la investigación médica. Gilead [está cobrando](#) desde esta semana 3.120 dólares por cada tratamiento para su medicamento contra el Covid-19, remdesivir, que fue [desarrollado](#) con una subvención de alrededor de 70 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses.

El precio de las vacunas contra el Covid-19 debe tener en cuenta las asociaciones público-privadas en las que se basa la investigación financiada con fondos públicos y asegurar que las patentes en torno a las vacunas se compartan en un fondo común de modo que la vacuna esté disponible [universalmente y sea gratuita](#).

Para socializar los riesgos y los beneficios de verdad y que tenga un impacto sobre la desigualdad, necesitamos comenzar por preguntas sencillas: ¿qué es el valor y cómo se crea? ¿Cómo podemos socializar tanto los riesgos como los beneficios?

Es fundamental reconocer que no solo las empresas generan valor. También los trabajadores y las instituciones públicas en todos sus niveles lo hacen. Una vez hagamos esto será más sencillo asegurar que los esfuerzos de todo el mundo son remunerados adecuadamente y que los beneficios del crecimiento económico se distribuyen más equitativamente.

sucede si el Gobierno lo fuerza.